

MINUTA MESA REDONDA

“EL ESEQUIBO: NUESTRO RECLAMO EN PELIGRO”

Viernes, 2 de febrero de 2018
2:00 pm - 5:00 pm



Lugar: Sede del COVRI - Torre InterBank Seguros, Oficina 6-D, Calle Guaicaipuro entre Av. Pichincha y Av. Principal de Las Mercedes, El Rosal, Municipio Chacao – Caracas

#ESEQUIBO ESVENEZUELA

Información: contactocovri@gmail.com

  @ COVRI_org / @AntroCanal

ÍNDICE

OBJETIVO.....	pg. 1
ASISTENTES.....	pg. 1
DISCUSIÓN.....	pg. 1
CONCLUSIONES.....	pg. 7
ANEXO I. DECLARACIÓN DEL COVRI.....	pg. 9
ANEXO II. COMUNICADO DEL RÉGIMEN DE MADURO.....	pg. 11
ANEXO III. REFLEXIONES DEL EMBAJADOR (R) GERSON REVANALES.....	pg. 13

OBJETIVO: reflexionar e intercambiar opiniones en torno a las conclusiones contenidas en la Declaración del portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, del 30 de enero de 2018; el Comunicado emitido por el régimen de Maduro tras una reunión de la Comisión Presidencial de Estado para la garantía territorial y los asuntos limítrofes, el 31 de enero de 2018; y las propia Declaración del COVRI sobre las inaplicables conclusiones del Secretario General de la ONU en torno a la controversia del Esequibo del 31 de enero de 2018; con el propósito de construir propuestas de cara a la discusión de este tema en la Sesión de la Asamblea Nacional prevista para el día martes 6 de febrero de 2018.

ASISTENTES: diplomáticos e internacionalistas expertos en la materia, tales como los Embajadores Gerson Revanales, Oscar Hernández Bernalette, Carlos Bivero y Leandro Area; el Dr. Kenneth Ramírez, Presidente del COVRI; los Profesores Eloy Torres, Mirna Yonis, Carlos Luna, Carlos Pozzo Bracho; junto a activistas expertos como Jorge Luis Fuguett, Coordinador General de Mi Mapa de Venezuela incluye Nuestro Esequibo, el General (r) Oswaldo Sujú Rafo, Presidente del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEF), Rajihv Morillo, miembro de Venezuela Esequiba, y el Vicecomodoro Luis Inciarte, Secretario General de la Organización Nacional de Salvamento de los Espacios Acuáticos (ONSA). Además, contamos con la destacada participación de los Diputados Williams Dávila (AD-Miembro de la Comisión de Política Exterior de la AN), Ángel Medina Davis (PJ-Presidente del Grupo Venezolano del PARLATINO), Luis Barragán (Vente Venezuela), y la Asistente Ejecutiva del Diputado Luis Florido, Lic. Mayadevis González.

DISCUSIÓN: El Presidente del COVRI, **Dr. Kenneth Ramírez**, pronunció unas breves palabras de bienvenida, donde señaló que estamos ante una “situación muy grave para nuestra reclamación del Esequibo”, producto de más de una política exterior ideologizada que ha descuidado nuestros intereses nacionales en general, y que en particular, ha sido errática y torpe respecto al Esequibo y la Fachada Atlántica. Sin embargo, destacó que las conclusiones contenidas en la Declaración del portavoz del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, son “inaplicables” siguiendo las consideraciones de la Declaración del COVRI (Ver Anexo I), a saber: 1) el documento hace gala de pragmatismo y eclecticismo, lo cual no ayuda a solucionar la controversia, al remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia, y hablar de la continuidad de los buenos oficios como mecanismo complementario; 2) el documento es incoherente dado el reconocimiento de la propia ONU y de Guyana de la crisis humanitaria que existe en Venezuela; 3) Falta de competencia del Secretario General para remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia, que además Venezuela históricamente no ha reconocido, ni mediante la firma del Protocolo Facultativo de Jurisdicción Obligatoria, declaración unilateral o formando parte de algún tratado multilateral que reconozca su jurisdicción como el Pacto de Bogotá o la Convención del Mar. Lo mismo puede decirse de tratados bilaterales, como es el caso del Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial firmado por Venezuela y Colombia en 1939, donde Venezuela se cuidó en su Artículo II de exceptuar las controversias “que atañen a los intereses vitales, a la independencia o a la integridad territorial”.

Asimismo, el Dr. Kenneth Ramírez recordó, que la Corte Constitucional de Colombia resolvió el 2 de mayo de 2014 declarar inaplicable el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012 respecto al diferendo limítrofe colombo-nicaragüense sobre el archipiélago de San Andrés de noviembre de 2012, ya que cualquier “modificación” de límites debía hacerse mediante un tratado negociado y suscrito por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso colombiano. En consecuencia, Venezuela tiene margen y argumentos jurídicos de sobra para declarar “inaplicables” unas conclusiones no vinculantes del Secretario General de la ONU, que son además incoherentes, inoportunas y donde extralimita claramente sus funciones.

En relación al Comunicado del régimen de Maduro (Ver Anexo II), señaló que fue “tardío y poco contundente”, además de contener algunos errores “como el supuesto carácter sucesivo de los medios de solución pacífica de controversia, que no existe en el Derecho Internacional Público”. No obstante, al menos “mantiene la posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”. La Cancillería venezolana “debió objetar públicamente” el informe del Secretario General Ban Ki-moon “apenas fue colgado en la página web de la Secretaría de Naciones Unidas en diciembre de 2016”, y en lugar de ello “optaron por hacerlo en privado, según el Comunicado, sería importante que muestren la comunicación oficial que enviaron”. El Dr. Kenneth Ramírez valora la “unidad nacional en torno al reclamo Esequibo que es un asunto de Estado, pero hacerlo nuevamente, cuando el régimen optó por el menosprecio y la diplomacia secreta después que se le tendió en 2015, es abusivo. Lo que corresponde es asumir responsabilidades en primera instancia, y luego convocar un proceso de amplia consulta nacional”. Se reunieron al menos 3 veces en Caracas con el buen oficiante reforzado Dag Nylander, y varias veces en Nueva York, donde en al menos dos oportunidades habría estado presente una delegación de Guyana. “Todo esto se hizo a espaldas del país. Ahora deben rendir cuentas y explicar en qué consistieron sus gestiones. ¿Por qué no hubo negociador experto a tiempo completo?”.

Finalmente, señaló que el mecanismo de los buenos oficios, más aún reforzados con mediación, no se ha agotado. “Guyana nunca ha negociado realmente. Ahora por vez primera no le conviene el statu quo, requiere cerrar el diferendo en tierra para poder abordar una delimitación marítima y aprovechar los recursos de petróleo y gas natural que se han venido descubriendo en la zona”.

Acto seguido, hizo uso de la palabra el **Embajador (r) Gerson Revanales**, que mediante el uso de una presentación indicó cómo podría evolucionar jurídicamente la situación, tomando en cuenta varios escenarios posibles (Ver Anexo III). Señaló que el caso aún no ha sido introducido oficialmente en la Corte Internacional de Justicia, y reiteró que Venezuela no ha reconocido la jurisdicción de la Corte. A su vez, elucubró sobre las posibles acciones que podrían llevarse a cabo por parte de los gobiernos de Venezuela y de Guyana. Si el Secretario General de la ONU, António Guterres, no remite directamente la controversia a la Corte, en todo caso, Guyana lo hará a partir de sus conclusiones. En este punto, Venezuela debe decidir si: a) no acudirá y sólo emitirá un nuevo Comunicado con más argumentos jurídicos que señalen el no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, y dejar que sea esta la que examine de oficio su competencia y admisibilidad de la demanda conforme al Artículo 36 Numeral 6 de su Estatuto; b) acudir para introducir un recurso de excepción preliminar que señale la falta de competencia de la Corte al Venezuela no haber reconocido históricamente su jurisdicción; o, c) acudir para contrademandar a Guyana por el incumplimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966, siendo esto último un camino riesgoso y poco recomendable, que podría dar lugar a una futura interpretación de reconocimiento venezolano de jurisdicción de la Corte.

El Embajador Revanales instó a la prudencia de acuerdo a los pronunciamientos oficiales de cualquiera de los Poderes Públicos de nuestro país, así como también enfatizó en la necesidad de reconstruir la posición nacional, y emprender acciones que busquen ganar simpatías hacia nuestro reclamo, más allá del régimen de Maduro, por parte de la Comunidad Internacional.

Seguidamente, el **General (r) Oswaldo Sujú Rafo** expresó su satisfacción con respecto a la incorporación de gente joven al tratamiento y discusión de la controversia. Refiriéndose a la posición de Guyana, estableció que está buscando aprovecharse de la aguda crisis venezolana, “pero que debe tener claro que lo ilegal nunca podrá ser legal”. Recordó que a la jurisprudencia internacional

establece que mientras no se solucionara el conflicto terrestre, no podían dictaminar sobre el mar, así que, tenemos a favor toda la tradición histórica, aspecto que debemos enfatizarlo en la actualidad. El General Sujú Rafo manifestó que llevará a cabo un pronunciamiento de la organización que encabeza, el IDEF, reclamando a la Secretaría General de la ONU por sus absurdas conclusiones. Asimismo, en relación al uso del territorio marítimo, permitiendo el inicio de una explotación petrolera en una zona aún no delimitada.

Asimismo, el **Embajador (r) Carlos Bivero** manifestó que es sensato mantener la mayor prudencia y focalizar en el Poder Ejecutivo las interrogantes clave, para que asuma responsabilidades y tener la información necesaria para solucionar este problema. Además, sugirió que se estudiase cuáles son las bases en concreto que se poseen para accionar, tales como el mandato de mediación y las acciones del Secretario General. El hecho de referir el caso a la Corte Internacional de Justicia pone a Venezuela en la tarea de definir cuál es su posición jurídico-política. Es sumamente necesario aclarar la ambigüedad sobre la posición de Venezuela sobre el problema y el proceso de mediación. Consideró importante declarar la “inaplicabilidad” de las conclusiones del portavoz del Secretario General, ya que también existe la interrogante sobre “qué significa y qué alcance tendría el mencionado proceso complementario de buenos oficios”. Las únicas facultades del Secretario General de la ONU en el marco de la Carta —es decir a ser ejercidas no ya más en el marco del Acuerdo de Ginebra— son las establecidas en el Artículo 99 de la misma y consisten en alertar al Consejo de Seguridad “hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacionales”.

Seguidamente el **Diputado Angel Medina** subrayó “la falta de una política de Estado con relación al tema”, ya que este existe sólo como una política de gobierno, que ha sido explícitamente manipulado a favor del oficialismo, en el cual no se ha hecho prácticamente nada por establecer una posición nacional, “dejando de lado a expertos en el área”. Expresó también la situación de debilidad que posee Venezuela frente a Guyana con relación a este tema; para el país vecino este problema es fundamental, mientras que en nuestro país ha existido “un descuido real respecto a esto, que sólo ha sido tratado desde organizaciones de la sociedad civil como el COVRI”. En su opinión, lo mejor que se puede hacer es “buscar ganar tiempo”, ya que Venezuela se encuentra en una posición defensiva, y tiene que construir una política de Estado en medio de la crisis que vivimos. A su vez, Venezuela debe tratar de tocar espacios de integración regional en los que Guyana no forma parte, como el Parlamento Latinoamericano, o el MERCOSUR. Enfatizó en la falta de preparación de nuestro país con respecto a afrontar este problema, y en el aprovechamiento por parte de Guyana de la debilidad del gobierno venezolano. Instó también, a analizar la presencia de Brasil y China en el Esequibo, y la falta de presencia efectiva de Venezuela en el límite de facto.

El **Embajador (r) Oscar Hernández** evidenció que el escenario actual es lo que por muchos años la diplomacia venezolana de los gobiernos civiles trató de evitar. “Estamos en un punto sumamente complejo, en el que además existe un claro desprecio por la diplomacia profesional en Venezuela”. Nos encontramos en desventaja, ya que, Guyana se encuentra sumamente preparada y Venezuela en crisis, y para establecer una postura oficial con respecto a este tema, debemos unirnos y tomar responsabilidad. El mismo reconoció que no se tuvo en consideración la situación del país cuando se llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia, por lo cual las conclusiones del portavoz del Secretario General de la ONU fueron “absolutamente inoportunas”. Pero que a su vez no existen razones para tener simpatía hacia nuestro país en estos días, dado el tipo de gobierno que tenemos, el cual está ampliamente aislado y sancionado.

El **Profesor Carlos Luna** elocuentemente, identificó que nuestro país, a nivel global camina en dirección contraria al Mundo. El oficialismo dice que todos los Estados son sus amigos, pero esta no es la realidad. Venezuela posee poca capacidad de actuación internacional en estos momentos. Determinó que a nivel regional esto desataría un efecto dominó en el que la integridad del Estado está en juego; “si Guyana llegara a ganar la disputa, establece un precedente para los otros Estados de reclamar territorio de Venezuela”. Indicó que la oposición y la Asamblea Nacional tienen que ubicarse de que la grave situación actual “es el resultado del despliegue del proyecto socialista establecido por el régimen venezolano en su época de bonanza, que dejó hacer a Guyana, y en este momento deben asumir y culpar a quien tiene que culparse. Si se sigue jugando de acuerdo con la agenda del gobierno, vamos a seguir haciendo lo que este disponga. Chávez compró la visión cubana sobre nuestra reclamación como un acto de colonialismo. La abandonó en la práctico, y envalentonó a Guyana. Ahora deben asumir responsabilidades. Además, desde 2015, se han valido incluso de asesores que no saben nada sobre la controversia ni tampoco de Derecho Internacional, como los abogados penalistas Elsie Rosales y Carmelo Borrego; mientras el negociador en jefe, Roy Chaderton Matos, ha tenido hasta cinco cargos, entre ellos participar en las negociaciones de República Dominicana, y ha tenido problemas de salud, lo que le ha impedido realmente ocuparse de este asunto tan vital para nuestros intereses nacionales”.

El **Diputado Luis Barragán** destacó que el régimen no es el único responsable de esta situación, sino también en alguna medida lo es la oposición. Expresó la inadecuada respuesta de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional con relación a esta controversia territorial, “donde debió hacer más seguimiento y mayor presión al régimen”. Exhortó a ambas partes a hacer una autocrítica con relación al tema y al descuido de la integridad territorial de Venezuela. Destacó que la sesión de la Asamblea Nacional del día martes se tiene que insistir en 3 cosas: primero en los puntos contenidos en la Declaración del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), y más específicamente que la Asamblea Nacional debe “declarar la inaplicabilidad de las conclusiones del portavoz del Secretario General de la ONU”, y vista la necesidad de discutirlo, buscar a todos los expertos de la materia como asesores. En segundo lugar, destacó que existe la necesidad de crear una Comisión Especial sobre el Esequibo en la Asamblea Nacional, con el objetivo de articular un amplio debate nacional, hacer investigación y seguimiento a la grave situación que se ha presentado, así como establecer responsabilidades políticas. La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional no puede por sí sola tratar con el tema del Esequibo, dado las gestiones que tiene que hacer en la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos a nivel internacional. En tercer lugar, señaló que volverán a presentar el proyecto de Ley de Estadidad del Esequibo, para romper con la línea de monotonía y generar una amplia discusión a nivel nacional, llevando un mensaje de sensibilidad sobre el tema a las Fuerzas Armadas. El Diputado Barragán resumió como ventajas del proyecto de ley: a) movilizar a la ciudadanía en relación a este problema; b) actualizar la discusión del tema y reconstruir la posición nacional, y, c) poner contra la pared al régimen, dejando en evidencia la desprofesionalización de la Cancillería.

En representación de la organización no gubernamental Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo, **Jorge Luis Fugett**, invitó a la búsqueda de consenso entre las partes, y establecer el tema del Esequibo como un problema fundamental de la actualidad. Declaró que estamos viviendo “algo similar a lo que ocurrió en la antesala del Tratado Arbitral de Washington y el nulo e irritado Laudo Arbitral de París de 1899”, donde la aguda crisis nacional hizo que actores externos nos despojaran de nuestros derechos territoriales. Debemos hacer lo posible para no llegar a la Corte,

siendo que todo esto es “responsabilidad del gobierno y su diplomacia secreta. El buen oficiante reforzado con mandato de mediación, Dag Nylander, vino 3 veces a Caracas, y fue 4 veces a Georgetown. Mientras en Guyana se reunión con la oposición, aquí en Venezuela sólo quiso hablar con el gobierno. Incluso, además de las reuniones en Nueva York donde estuvieron presentes ambas delegaciones, se habría producido una en Antigua & Barbuda el 27 de diciembre de 2017 de la cual nadie tiene mayor noticia. El Canciller debe dar explicaciones de todas las gestiones realizadas en la Asamblea Nacional”. Expresó su apoyo a la creación de una Comisión Especial sobre el Esequibo en la Asamblea Nacional, e instó a realizar a presionar por la destitución de Reina Margarita Arratia Díaz, Embajadora de Venezuela en Guyana, quien no defiende nuestro reclamo y elude a la prensa guyanesa. Recomendó además la preparación de un equipo de expertos multidisciplinario para realizar un trabajo completo y que “la República se prepare para todos los escenarios”. Consideró importante denunciar internacionalmente las acciones de Guyana, ya que por un lado en el Grupo de Lima declaran que hay que tener una acción solidaria hacia los venezolanos que huyen de la crisis, y por otro lado, a los que logran cruzar el Río Cuyuní “los encarcelan y penalizan de forma arbitraria”. Por último, solicitó un pronunciamiento del Poder Ejecutivo en relación a la deuda actual que posee Guyana con el Estado venezolano en el marco de PETROCARIBE, lo cual puede ser un mecanismo de presión importante.

El **Diputado Williams Dávila** manifestó que lamentablemente “no nos encontramos a la altura de las exigencias” y que es necesario llevar a cabo un pronunciamiento, no sólo de la Asamblea Nacional (que representa el único poder democrático que poseemos en este momento) sino también de la Unidad Democrática. Asimismo, señaló que no debemos de perder de vista que “la grave situación actual respecto al Esequibo es culpa del gobierno y que la Asamblea Nacional no tiene competencias para asumir esta responsabilidad, salvo exigir cuentas de lo ocurrido”. Subrayó que “no podemos caer en el chantaje de la unidad nacional. Se han cometido “demasiados errores por parte del régimen. Cuando estuvimos en la Comisión de Estado y realizamos algunos planteamientos, se nos quiso acusar de traición a la Patria. Juegan a la unidad nacional a conveniencia y sin ninguna seriedad”. Empero, opinó que “este es un tema que nos tiene que unir a todos los factores de la oposición democrática y a la sociedad civil en defensa de nuestra integridad territorial”. Manifestó “que en la discusión que realizamos en la Comisión de Política Exterior valoramos positivamente la Declaración del COVRI, y coincidimos con sus planteamientos, que serán recogidos en el proyecto de acuerdo parlamentario que llevaremos el martes a la plenaria de la Asamblea”. Apoyó también la propuesta del Diputado Luis Barragán de la creación de una Comisión Especial sobre el Esequibo, aunque “no hay recursos, ya que el régimen cortó el presupuesto de la Asamblea, y esto hace retador los trabajos que se puedan llevar adelante en esa Comisión, lo importante sería que logre articular el debate nacional”. Recordó que este año se cumple “el 50 Aniversario de la creación línea de Base Recta entre el Río Esequibo y Punta Araguapiche. El Presidente Leoni ha sido el mandatario que más defendió nuestros derechos territoriales en el Esequibo y la Fachada Atlántica, gran diferencia con lo que han hecho Chávez y Maduro en los últimos años”.

La **Lic. Mayadevis González** expresó en nombre del Presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, Diputado Luis Florido, su máxima preocupación respecto al tema y su interés en escuchar los planteamientos de la sociedad civil, como la “valiosa Declaración realizada por el COVRI”, de cara a la construcción de un acuerdo parlamentario al respecto que será presentado en la sesión plenaria del martes 6 de febrero de 2018, el cual merece tener el mayor respaldo por tratarse de un tema de Estado.

En representación de la organización no gubernamental ONSA, el **Vicecomodoro Luis Inciarte**, indicó la falta de enfoque del tema con relación a la Fachada Atlántica, que “representa el 20% de los 500 mil kilómetros cuadrados de áreas marítimas que posee Venezuela”, así como “la consolidación de nuestra salida estratégica hacia el Atlántico”. Solicita añadir esta amenaza a cualquier cálculo en relación al Territorio Esequibo, y por tanto pidió referirse al asunto como “Guayana Esequiba y su Fachada Atlántica”. Recordó que este espacio geográfico queda siempre en segundo plano, “quizás porque en Caracas el Ávila nos impide ver el mar”, agregando que el interés actual de Guyana son los hallazgos petroleros en las áreas marinas y submarinas que le corresponden al Esequibo, haciendo incluso “una proyección hacia el Norte que corta la Plataforma que le corresponde a Delta Amacuro. No podemos permitirle a Guyana encerrarnos”. También expresó su pleno respaldo respecto a la creación de una “Comisión Especial sobre la Guyana Esequiba y su Fachada Atlántica en la Asamblea Nacional”.

La **Profesora Mirna Yonis** confesó su preocupación sobre el tema de la memoria histórica reciente, de lo que se ha hecho y de lo poco que se conoce de las acciones sobre el tema. No obstante, se felicitó de la presencia de expertos, políticos y académicos en la reunión. Enfatizó en la necesidad de una educación ciudadana y en la formación de criterio, y establecimiento de un registro de lo que se ha hecho por los distintos factores. La misma invitó al COVRI a servir como medio de enlace y de educación sobre el tema. Respecto al Comunicado del régimen de Maduro opinó que “resultó insuficiente; con lo único que se puede coincidir es con el elemento substantivo de no reconocer la jurisdicción de la Corte”.

El experto **Rajihv Morillo** opinó que el “Comunicado del gobierno venezolano es decente, y al menos oportuno en esta ocasión. Lo cual no significa que no seamos críticos con omisiones anteriores”. Estamos en esta situación “como consecuencia de las torpes y negativas declaraciones y concesiones de Chavez. Debemos evitar que el tema sea considerado por la Corte Internacional de Justicia”. Respecto a esto último, destacó “que estamos jurídicamente blindados porque Venezuela no firmó el Pacto de Bogotá y no nos pueden obligar a reconocer la jurisdicción de la Corte, pero pueden llevarse a cabo presiones políticas y económicas”. Exhortó a seguir llevando la controversia “de acuerdo a los medios políticos. Necesitamos ganar tiempo, ya que actualmente, por los medios jurídicos no estamos listos para ir a la Corte. Estamos invertebrados, vivimos una crisis profunda y estamos como hace 120 años”. Hoy por hoy, la Asamblea Nacional “es el único Poder Público con legitimidad internacional”, e instó a los Diputados “a ir a la misión del PNUD y emprender gestiones de investigación sobre las negociaciones llevadas adelante y todas las ideas que fueron sugeridas a lo largo de este último año”. Recomendó la creación, a través del COVRI, de una mesa nacional de expertos de carácter técnico, en la que se reúnan y hagan un documento que sintetice los criterios de cada uno, con el fin de ser presentado al país como propuesta de posición nacional y entregada a cada una de las ramas del Poder Público. Propuso también como posibles soluciones la recuperación social y económica del Esequibo, así como también la inclusión de los Esequibanos.

El **Profesor Eloy Torres** condenó el descuido del interés nacional y aseguró que “el Esequibo es el punto de partida para la desintegración del país, y eso no podemos permitirlo”. Reconoció la esperanza y el esfuerzo de reconstrucción del país que se viene impulsando desde la Asamblea Nacional, la sociedad civil y los académicos. “Al país le hace falta una dosis de imaginación o de audacia. Creo que Venezuela posee una gran oportunidad frente a esta gran crisis”. Sentenció a su vez que “el régimen será el culpable del desastre geopolítico al que nos está llevando, donde podemos perder el Esequibo y la salida al Atlántico con todos los cuantiosos recursos presentes en esa área. La vorágine más grande que ha visto este país y el Hemisferio en tiempos contemporáneos”.

CONCLUSIONES: Para finalizar, el **Dr. Kenneth Ramírez** volvió a hacer uso de la palabra con el propósito de presentar **algunas recomendaciones a la Asamblea Nacional** que representan el consenso de lo discutido a lo largo de la tarde:

a) La Asamblea Nacional debe hacer responsable de la grave situación actual en que se encuentra nuestro reclamo Esequibo al régimen de Maduro, el cual no realizó una objeción pública del informe de Ban Ki-moon en diciembre de 2016 y tampoco nombró un negociador experto a tiempo completo para gestionar la controversia;

b) La Asamblea Nacional debe interpelar al Canciller, Jorge Arreaza, para exigirle una rendición de cuentas y una determinación de responsabilidades por todo lo ocurrido, así como una explicación de los próximos pasos a seguir para salvaguardar la integridad territorial de la República y los responsables designados para esta delicada tarea. El Canciller Arreaza debe concurrir al Parlamento venezolano si es que realmente desea “unidad nacional”, y no sólo utilizar nuevamente con propósitos propagandísticos y discursivos esta loable bandera como ocurrió en 2015;

c) La Asamblea Nacional debe declarar “inaplicables” e inoportunas” las conclusiones contenidas en la Declaración del portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, del 30 de enero de 2018, siguiendo los argumentos políticos y jurídicos contenidos en la Declaración del COVRI;

d) La Asamblea Nacional debe hacer un llamado al Secretario General de la ONU a mantener la continuidad de los buenos oficios con mandato reforzado de mediación, sin plazos perentorios, y con la flexibilidad que exige la crisis humanitaria que sufre Venezuela, la cual ha sido reconocida por la ONU y otras organizaciones internacionales, así como la propia Guyana en el marco del Grupo de Lima;

e) Instamos a la Asamblea Nacional a declarar el carácter vital del Esequibo y la Fachada Atlántica para nuestros intereses, tal como el país lo ha hecho en el pasado para defender el Golfo de Venezuela, enviando así un claro mensaje a Guyana: Venezuela no aceptará en modo alguno la remisión de la controversia a un tercero para que lo resuelva mediante un arreglo judicial o procedimiento arbitral. Las únicas vías abiertas son los medios diplomáticos. Hacemos este llamado a declarar el carácter vital del Esequibo y la Fachada Atlántica, pensando en las próximas generaciones, tomando en consideración el valor geoestratégico que representa la consolidación de nuestra salida al Atlántico, así como sus inmensos recursos, su valor ecológico, y su importancia histórica. La primera noticia de la existencia de esta “Tierra de Gracia” en Europa, y el primer contacto entre culturas, se debe al tercer viaje realizado por Cristóbal Colón en 1498. Es decir, hace casi 520 años, Colón llegó a las costas del hoy estado Sucre atravesando nuestra Fachada Atlántica. Esta masa de agua es esencial para nuestra historia e identidad nacional, una prolongación de nuestro padre río Orinoco, columna vertebral de nuestro territorio, la cual pretende ser puesta en cuestión por Guyana. Nuestra Fuerza Armada Nacional tiene el deber y la responsabilidad histórica, de ser garantes de nuestra integridad territorial, más allá de la irresponsabilidad del régimen;

f) La Asamblea Nacional debe considerar seriamente la creación de una Comisión Especial para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, con el objeto de realizar labores de investigación y seguimiento del tema, así como articular un amplio debate nacional al respecto, y liderar los trámites legislativos y consultas con la sociedad civil de cara a una Ley de Estatidad del Esequibo y una Ley que fije claramente la Fachada Atlántica del Delta del Orinoco y su posible extensión a 350 millas náuticas. Esto, para enviar un mensaje contundente a Guyana y el resto de los vecinos: nuestra salida al Océano Atlántico es innegociable;

g) La Asamblea Nacional debe ponderar la incorporación de la controversia del Esequibo y lo inoportuno que resultan las conclusiones del Secretario General de la ONU en medio de la grave crisis que atraviesa Venezuela, como una línea estratégica de nuestra diplomacia parlamentaria en los próximos años.



Declaración del COVRI sobre las inaplicables conclusiones del Secretario General de la ONU en torno a la controversia del Esequibo

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) como organización de la sociedad civil plenamente comprometida con la defensa de nuestros intereses nacionales, convencida de la justicia de nuestra reclamación del Territorio Esequibo, y consciente de nuestras posiciones históricas al respecto; desea fijar la siguiente posición:

1) Las conclusiones contenidas en la Declaración del portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, del 30 de enero de 2018, son absolutamente inaplicables.

En primer lugar, nos encontramos ante un documento poco claro que remite el diferendo territorial a la Corte Internacional de Justicia, al tiempo que llega a la conclusión que Guyana y Venezuela “podrían beneficiarse de continuidad en los buenos oficios” de la Secretaría General de la ONU “mediante un proceso complementario”; un ejercicio de eclecticismo y pragmatismo para tratar de dar gusto a ambas partes, el cual en nada ayuda a resolver la controversia. En segundo lugar, observamos una falta de coherencia al querer resolver en forma expedita un diferendo territorial cuando la propia ONU ha reconocido que una de las partes, Venezuela, atraviesa una severa crisis humanitaria. Cabe agregar, que esto último también ha sido reconocido por la otra parte, Guyana, que es signataria de la reciente Declaración de Santiago de Chile del Grupo de Lima acordada el 23 de enero de 2018. En tercer lugar, estamos ante una clara falta de competencias del Secretario General de la ONU para remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

2) Subrayamos que el Secretario General de la ONU no tiene competencia para remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia. Tomando en cuenta el principio de libre elección de los medios de solución pacífica consagrado en el Artículo 33 de la Carta de la ONU, que permite a los sujetos de Derecho Internacional determinar voluntariamente cómo resolverlas; así como la sección motiva y dispositiva del Acuerdo de Ginebra que privilegia el entendimiento entre las partes; la función del Secretario General es colaborar con las mismas en la elección de un medio. Esta ha sido la tradicional posición venezolana, la cual fue recogida en el “Comunicado de la Cancillería de Venezuela referente a las disposiciones del Artículo IV del Acuerdo de Ginebra” del 11 de diciembre de 1981, y fue defendida entre 1984 y 1989 ante la insistencia del representante del Secretario General de aplicar la llamada “Fórmula Cordovez” (conciliación más arbitraje). Debemos recordar que el propio preámbulo del Acuerdo señala la convicción de las partes de que la controversia debe ser resuelta “amistosamente” y “en forma que resulte aceptable para ambas”; por tanto, no se trata de un asunto jurídico, sino de un asunto político, y esto explica también por qué se establece en el propio Acuerdo de Ginebra, la creación de una Comisión Mixta negociadora. Ergo, los medios jurídicos (arreglo judicial o arbitraje) deben ser excluidos, por no ajustarse al objetivo y espíritu del Acuerdo, y por tener una carga históricamente traumática para el país. Además, Venezuela no es signataria del Protocolo Facultativo sobre Jurisdicción Obligatoria de la Corte y tampoco ha aceptado formar parte de tratados multilaterales que reconocen su jurisdicción como el Pacto de Bogotá y la Convención del Mar. El Secretario General de la ONU no puede sustituir la voluntad de las partes como tampoco ningún otro órgano de la ONU.

3) La Corte Internacional de Justicia ha sido siempre cuidadosa en cuanto al ejercicio de su jurisdicción, examinando antes del fondo de una cuestión, su competencia y la admisibilidad de una demanda, según el Artículo 36 Numeral 6 de su Estatuto. Al respecto, cabe recordar, que la Corte Internacional de Justicia ha sido muy clara, como lo fue su predecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, al establecer que para constituirse en parte en un proceso ante ella, el Estado debe expresar su consentimiento, es decir, su voluntad, de manera clara e inequívoca, de aceptar su jurisdicción. Si bien es cierto que el Acuerdo de Ginebra otorga la facultad al Secretario General de la ONU de ayudar a escoger uno de los medios de solución pacífica previstos en el Artículo 33 de la Carta de la ONU, entre ellos el arreglo judicial, ello no podría significar que la Corte Internacional de Justicia es competente para conocer la controversia. Resulta un exceso concluir, que una disposición de un acuerdo sustituya la declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte. La misma Corte ha señalado incluso la inconveniencia de que un órgano internacional, como el Consejo de Seguridad (Caso Canal de Corfú, Reino Unido versus Albania, 1948; Caso Plataforma Continental del Mar Egeo, Grecia versus Turquía, 1978) pueda remitirle una controversia para su consideración, pues ello, no puede sustituir el consentimiento de los Estados partes en la misma. De manera que, la misma Corte Internacional de Justicia se verá obligada a declarar su incompetencia y por lo tanto no podría considerar la controversia. ¿Acaso será este el motivo real del eclecticismo de la Declaración del Portavoz del Secretario General de la ONU al concluir que también deben continuar los buenos oficios?

4) Reiteramos que el método de los Buenos Oficios no se encuentra agotado, sino que Georgetown se ha negado sistemáticamente a negociar desde el principio, bloqueando así la efectividad de este medio de solución pacífica de controversias. Por tanto, mantener el reforzamiento con un mandato de mediación, que permita proponer soluciones y no sólo acercar las partes, resulta plausible siempre y cuando exista disposición de ambas partes de negociar de buena fe. Además, debe proporcionarse un plazo razonable a este mecanismo, entendiendo que Venezuela se encuentra en medio de una situación interna grave, y que se trata de un tema que tiene una profunda carga histórica y emocional.

5) Hacemos responsable al régimen de Maduro por la grave situación actual en la que se encuentra nuestra reclamación, ya que no objetó públicamente el informe del Ex-Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, del 16 de diciembre de 2016, las cuales señalaron que el proceso de Buenos Oficios, llevados a cabo desde 1990 en el marco del Acuerdo de Ginebra, “continuará por un último año, hasta el fin de 2017, con un mandato reforzado de mediación”. El mismo informe añadió que “si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, a menos que los gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”. En este contexto, funcionarios del régimen de Maduro se reunieron a espaldas al país con el buen oficiante reforzado designado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, el diplomático noruego Dag Nylander, en varias oportunidades a lo largo de 2017, y nunca fue emitido un comunicado oficial.

6) Instamos a la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional a declarar inaplicables las conclusiones de la Secretaría General de la ONU, exigir a la Cancillería venezolana un pronunciamiento contundente al respecto, y convocar a una sesión especial de la Asamblea Nacional para aprobar un nuevo acuerdo en defensa de nuestros derechos soberanos sobre el Territorio Esequibo y rechazando la remisión de la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

Caracas, 31 de enero de 2018



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, informa a la Comunidad Internacional y al pueblo venezolano, que el día 30 de enero de 2018, recibió una comunicación del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, acerca del proceso de negociación sobre la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana.

Mediante esta comunicación, el Secretario General de las Naciones Unidas informa lo siguiente:

- Tras una breve reseña sobre el proceso de negociación desarrollado durante el año 2017, recomienda la Corte Internacional de Justicia como próximo medio a ser utilizado para la solución de la Controversia Territorial entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo. Adicionalmente consideró que el Gobierno de Venezuela y de Guyana podrían beneficiarse de continuidad en los Buenos Oficios de la ONU.

Sobre el particular, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento del Pueblo venezolano y del mundo, lo siguiente:

- Venezuela ratifica la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, suscrito y ratificado entre nuestro país y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el Gobierno de la Guayana Británica, tratado internacional que rige como Ley la Controversia Territorial entre las partes, válidamente reconocido y registrado ante la ONU, único camino hacia la solución definitiva sobre esta oprobiosa herencia del colonialismo británico.
- Venezuela dejó constancia oportunamente de su enérgica oposición a la carta del 15 de diciembre de 2016, suscrita por el anterior Secretario General Ban-Ki Moon, alertando que los criterios en ella contenidos excedían las competencias otorgadas a su investidura, contraviniendo el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra y el principio de equidad concertado entre las partes.
- La comunicación del Secretario General sobrepasa el carácter sucesivo de los medios de solución pacífica que establece el Acuerdo de Ginebra como metodología establecida para alcanzar una solución aceptable, práctica y satisfactoria de la controversia.
- Durante el año 2017, Venezuela mantuvo su posición histórica en el proceso de buenos oficios del Secretario General de la ONU, privilegiando el alto interés nacional y la permanente reivindicación de los derechos legítimos e irrenunciables del Pueblo venezolano sobre el territorio de la Guayana Esequiba.
- Estas negociaciones fueron conducidas con celosa confidencialidad como una regla

esencial del proceso de buenos oficios, por acuerdo entre las partes y con las Naciones Unidas.

- Cabe preguntarse las razones que privaron para recomendar la Corte Internacional de Justicia a dos Estados que no reconocen su jurisdicción, siendo que el propio Acuerdo de Ginebra contempla los medios políticos para la solución de la controversia territorial. En este sentido, Venezuela ratifica de manera determinante e inequívoca el proceso de negociación bajo estos medios.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, fiel a su tradición histórica y conforme a la Diplomacia Bolivariana de Paz, reitera su firme disposición de defender la integridad territorial de nuestra Patria y mantener la negociación política con base en el Acuerdo de Ginebra de 1966, como único camino para alcanzar la solución pacífica, práctica y satisfactoria para ambas partes y en favor de nuestros Pueblos.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, garantiza al Pueblo venezolano que continuará defendiendo los derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba y convoca a la unidad nacional para proteger los más sagrados intereses de la Patria.

El sol de Venezuela Nace en el Esequibo

Caracas, 31 de enero de 2018

Debido a que en estos últimos años, no ha habido avance significativo en la controversia entre Venezuela y Guyana, por el Esequibo, el Secretario General de las ONU (S.G. ONU), António Guterres, anunció que dejará en manos de la Corte Internacional de Justicia, la solución de esa disputa.

El análisis de la controversia con Guyana abarca cuestiones de procedimiento y de fondo, en esta oportunidad analizaremos las cuestiones de procedimiento de manera general y referencial; dejando el examen sobre las cuestiones de fondo para otra oportunidad.

ELEMENTOS A CONSIDERAR:

1. El S.G. ONU, remitió el caso Venezuela- Guyana a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en base al Artículo IV del Acuerdo de Ginebra (A.G.) de 1966 y 33 Carta ONU, contentivo de los mecanismos que no son de aplicación sucesiva,
2. Dicha disposición no establece ni orden ni jerarquía entre ellos, ni siquiera en el caso de las negociaciones que no necesariamente deben preceder la aplicación de otro mecanismo, excepto cuando tal obligación se basa en una norma convencional.
3. La “remisión” del expediente a la CIJ no significa de ninguna manera que el S.G. ONU este introduciendo el caso ante este tribunal y que este a su vez se vea obligado a examinarlo y decidir sobre ello.
 - a. Esta remisión no sustituye, la voluntad de los Estados de someterse a la Corte.
 - b. Hasta la fecha la controversia no aparece en la lista de casos del tribunal, lo que ocurre tan pronto un Estado deposita una demanda o dos Estados depositan el compromiso para recurrir a la Corte.
4. S.G. ONU Guterres estuvo en la CIJ, pero en ninguna parte se hace referencia de la remisión en la página oficial de la controversia con Guyana En la página de la Corte, cuando se inicia un proceso, aparece una referencia clara sobre quien deposito la demanda o quienes acordaron ir; además, titulan la controversia, es decir, definen el objeto y así, queda en la página que en la Secretaria (Greffier de la Cour) se está al tanto del caso, sólo hay referencias a la visita desde el punto de vista protocolar pero nada sustantivo.

LA COMPETENCIA:

5. En nuestra opinión la Corte es cautelosa pues nunca se había visto que un tercero depositara una demanda o llevara un caso.
6. No creemos que la CIJ esté convencida de su competencia por lo que vendrá un proceso largo si Venezuela lo rechaza, como debería hacer, aunque, nos preguntamos, que conviene hoy más: ¿decidir esta cuestión o darle largas?

7. La Corte deberá conocer su propia competencia:

- a. Para ello, deberá determinar que las partes tienen la voluntad de someterle la controversia,
- b. Es decir, que se ha aceptado su jurisdicción
- c. En el caso de Venezuela, nunca lo ha hecho ni a través de una declaración unilateral, de un acuerdo multilateral o bilateral, o de cualquier modo, tal como lo establece el Estatuto de la Corte.

8. Para determinar que el A.G. remite al Estatuto de la CIJ, debe procederse a una interpretación de dicho Acuerdo, en forma amplia y completa, de conformidad con las reglas de interpretación del Derecho Internacional Público, recogidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

LA INTERPRETACIÓN:

9. Para su interpretación deberá tomarse en cuenta:

- a. El **Preámbulo del A.G.**, en el que se establece que “...cualquier controversia pendiente (...) debe ser (...) amistosamente en forma que resulte aceptable para ambas partes”, y
- b. El **Artículo I** en el que se establece que hay que “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo practico de la controversia” lo que a primera vista **excluiría** el recurso al arreglo judicial en forma automática.

10. No parece deducirse de la redacción del A.G. en su conjunto y del espíritu del mismo que las partes hayan aceptado recurrir a la CIJ.

11. Aunque nada impide que en base a un acuerdo ulterior entre ellas o de conformidad con sus declaraciones de aceptación, expresión del consentimiento, las partes puedan solicitar a la CIJ que conozca la controversia y la resuelva.

12. La Secretaría de la CIJ (Greffier de la Cour), simplemente porque un tercero no puede someter un caso, recibió el expediente de la S.G ONU, pero no lo registró, como un caso en el tribunal, ya que no es parte.

ACCIONAR DE GUYANA:

- a. Sobre esta base, sin embargo, Guyana podría presentar una demanda en contra de Venezuela, ante la Secretaria,

- b. Seguramente solicitará la confirmación del Laudo Arbitral de 1899 y de las fronteras establecidas entonces, lo que no excluye que le someta al tribunal la delimitación de los espacios marítimos no definidos.

ACCIONAR DE VENEZUELA:

- a. Objetar la competencia, es decir una excepción preliminar,
- b. Responder y preparar la Contra-memoria correspondiente, o
- c. Rechazar y preparase para un proceso preliminar sobre la competencia que como hemos dicho se funda en el consentimiento de los Estados en aceptarla.

ESCENARIOS :

Escenario I: Si la Corte considera que es competente:

I. Bien porque Venezuela acepte ir al proceso sin necesidad de declarar la aceptación de la jurisdicción (foro prorrogatum), (lo que no es el caso, según la reciente declaración oficial del régimen de Maduro), o,

II. Por cuanto la misma CIJ determine que la demanda de Guyana es admisible, Venezuela podría, en este segundo supuesto:

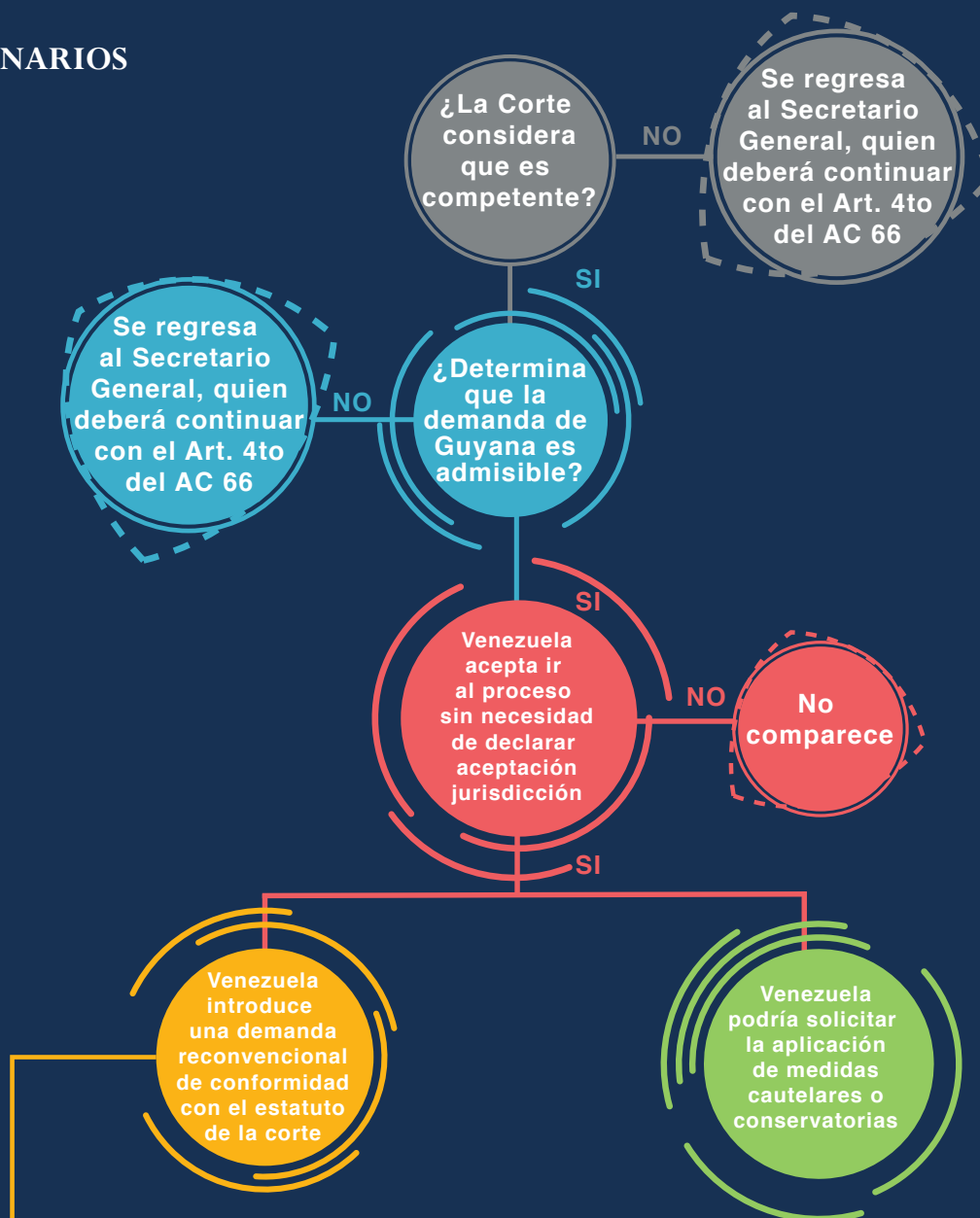
a. No comparecer, lo que, sin duda, trae consecuencias procesales importantes aunque no por ello la Corte favorecerá a Guyana en sus conclusiones sobre el fondo, lo que responde a la práctica del tribunal.

b. Es posible también, en el caso de que se acepte la competencia, que Venezuela, introduzca una demanda reconventional de conformidad con el Estatuto de la Corte, en la que solicitaría a la Corte que determine que Guyana habría violado el A.G. por diversas razones, no sólo en cuanto a su objeto y fines, sino por haber incumplido sus obligaciones al realizar actos de jurisdicción en el territorio y en espacios no delimitados, es decir, actos violatorios del A.G. No es fácil, hay que determinar que Guyana viola el Acuerdo de Ginebra por varias razones, es un camino riesgoso.

En este contexto, Venezuela podría además solicitar a la CIJ que indique medidas cautelares o conservatorias que impidan a Guyana, (*mientras se decide el fondo, es decir, la controversia sobre la violación del Acuerdo de Ginebra de 1966*), que no ejerza ninguna acción sobre el territorio ni sobre los espacios que proyecta.

Escenario II: la CIJ considera que no es competente. De allí entonces de nuevo a negociar. Se va a la mesa o se sigue en este proceso que paraliza por 2 o 3 años cualquier actuación, si la corte adopta medidas precautelares o conservatorias o provisionales como las llaman indistintamente.

ESCENARIOS



NOTA: Contenido de la Demanda

Solicitaría a la Corte que determine que Guyana habría violado el Acuerdo de Ginebra por diversas razones, no sólo en cuanto a su objeto y fines, sino por haber incumplido sus obligaciones al realizar actos de jurisdicción en el territorio y en espacios no delimitados, es decir, actos violatorios del Acuerdo de 1966.

Breve análisis del remitido del régimen de Maduro:

- » Afortunadamente usa el término remisión.
- » Señala que no se debió enviar por que contradice la aplicación sucesiva de los medios de solución, lo que es FALSO, no hay supremacía ni jerarquía ni orden de aplicación. Solo que unos son políticos por el carácter de sus decisiones, no vinculantes; y otros jurídicos, el arbitraje y el arreglo judicial, es decir, la Corte, cuyas decisiones SI son vinculantes.
- » Tampoco es muy acertado decir que por qué se debe encontrar una solución práctica la CIJ no es competente. La Corte puede decidir sobre la base de la equidad si las partes lo piden, y en determinadas condiciones; lo cual es interesante pero no es jurídicamente apropiado por las siguientes razones:

- La primera es que simplemente no hemos aceptado la jurisdicción de la Corte.
- Apostamos a la solución negociada que es la menos traumática.

Preguntas que debemos hacernos:

1. ¿Conviene ir ahora o tratar de postergarlo? Seguir apostando por los buenos oficios ahora con mandato reforzado de mediación
2. ¿Políticamente? ¿Jurídicamente? ¿Estamos dispuestos a defender la nulidad del Laudo como seguramente solicitará Guyana en la CIJ, y estar en un proceso en busca de resultados favorables?
3. ¿Sabemos qué pasaría si la CIJ confirma el Laudo? Los límites terrestres serían los mismos, pero los espacios marítimos podrían ser delimitados por la Corte. ¿Nos conviene? La CIJ podría establecer como en varios casos los criterios de delimitación, lo cual está fuera de nuestras manos. De nuevo... ¿Nos conviene?
4. Ir o no ir a la Corte no tiene importancia internacionalmente. Es decir, nadie va a decir que Venezuela elude sus responsabilidades si rechaza la competencia pues esto se ha hecho siempre. Es jurídica y políticamente válido. Es nuestra posición histórica

Recomendaciones:

1. El A.G. de 1966 no es base de consentimiento, como lo ha sostenido la Declaración del COVRI.
2. Es importante es iniciar el debate de lo político y lo jurídico.
3. En las declaraciones públicas hay que ser muy prudentes.
4. Lo que se dice es doctrina o puede ayudar a la doctrina y ella puede ser favorable a Guyana o al menos considerada por la Corte.
5. Hay que esperar que Guyana demande para responder argumentando la falta de competencia de la Corte pues nunca se ha aceptado.
6. Contrademandar...se llama demanda reconconvencional.... para exigirle a Guyana que respete el acuerdo de 1966 si es que hay argumentos para pensar que lo ha violado por las concesiones otorgadas y etc.... Esto último sería parte de una estrategia para alargar la cuestión y obligar a Guyana a negociar fuera de ;a Corte, lo que deja abierto Guterres en su declaración.